GONZALO BELANO Y OTRAS 807 PERSONAS

VS

LA REPUBLICA DE ARCADIA.

Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentado ante la Honorable Corte

Interamericana de Derechos Humanos.

I.	<u>ÍNDICE</u>	
II.	BIBLIOGRAFÍA.....	4
	☐ Documentos legales.....	4
	☐ Libros.....	4
	☐ Sentencias de la Corte IDH.....	4
	☐ Opiniones consultivas Corte IDH.....	9
	☐ Comisión Interamericana de Derechos Humanos.....	10
	☐ Comité de derechos humanos.....	10
	☐ Comité contra la tortura.....	11
	☐ Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados.....	11
	☐ Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	11
	☐ Tribunal de Justicia de la Unión Europea.....	14
III.	OBJETO DE LA DEMANDA.....	15
IV.	HECHOS.....	15
	☐ Antecedentes de Puerto Waira y Arcadia.....	15
	☐ La migración masiva.....	16
	☐ Personas excluidas de la condición de refugiado.....	16
V.	CUESTIONES PRELIMINARES.....	18
	☐ Competencia.....	18
	☐ Excepción por falta de agotamiento de los recursos internos.....	18

☐	Excepción por la indeterminación de las víctimas del caso.....	20
VI.	ANALISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.....	21
☐	La denegatoria de asilo de Gonzalo Belano y otros 807 waienses.....	21
☐	Trato discriminatorio hacia Gonzalo Belano y las otras 807 personas waienses.....	24
☐	La devolución indirecta de Gonzalo Belano y de las otras 807 personas waienses.....	26
☐	El asesinato de Gonzalo Belano y 28 personas mas que fueron deportadas a PW.....	30
☐	La detención de Gonzalo Belano y las otras 807 personas.....	32
☐	La desaparición forzada de siete personas deportadas a PW.....	34
☐	Arcadia violó el derecho a la protección familiar y los derechos de los niños por la deportación de 808 waienses.....	36
☐	Arcadia violó las garantías judiciales a Gonzalo Belano y los otros 807 waienses.....	38
☐	Las garantías mínimas en el derecho a recurrir de un fallo.....	40
VII.	PETITORIO.....	44
VIII.	MEDIDAS DE REPARACIÓN.....	44

II. **BIBLIOGRAFÍA.**

▪ **Documentos legales.**

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

▪ **Libros.**

Nogueira Alcalá, Humberto. “Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: doctrina y jurisprudencia”. vol. 9, no. 1, 2003. Pág. 22

Goffman, Erving (1986). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Nueva York: Simon & Schuster. Pág. 25

▪ **Sentencias de la Corte IDH.**

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Pág. 19 y 35

Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Pág. 19

Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Pág. 18 y 20

Caso Mévoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Pág. 18

Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Pág. 19

Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Pág. 19

Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de agosto de 2008. Pág. 19 y 35

Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Pág. 19

Caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Pág. 19

Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Pág. 19

Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Pág. 19 y 20

Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de septiembre de 2009. Pág. 19

Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Pág. 19, 20, 33 y 41

Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Pág. 19

Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Pág. 19

Caso Liakat Ali Alibux Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Pág. 20

Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Pág. 21, 22 y 27

Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Pág. 24 y 38

Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Pág. 26

Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2017. Pág. 30

Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Pág. 30

Caso Wong Ho Wing Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Pág. 30

Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Pág. 30 y 31

Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril de 2015. Pág. 30

Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Pág. 31

Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Pág. 39

Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Pág. 31

Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia de 7 de marzo de 2005. Pág. 31

Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Pág. 31

Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Pág. 32, 33 y 41

Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Pág. 32

Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Pág. 32

Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999. Pág. 32

Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Pág. 33, 34 y 41

Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Pág. 33

Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Pág. 33

Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Pág. 34

Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Pág. 34

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Pág. 34 y 36

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Pág. 34

Caso Blake Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Pág. 35

Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Pág. 35

Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Pág. 38

Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Pág. 38

Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Pág. 38

Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Pág. 38 y 41

Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Pág. 32 y 39

Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Pág. 38 y 39

Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Pág. 39

- **Opiniones consultivas de la Corte IDH.**

El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Pág. 39

Condición jurídica y derechos humanos del niño. OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Pág. 26, 38 y 39

Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Pág. 26, 37, 38 y 39

Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. Pág. 21, 37, 38 y 40

La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). OC-25/18 de 30 de mayo de 2018. Pág. 22

- **Comisión Interamericana de Derechos Humanos.**

Caso Rafael Ferrer-Mazorra y otros Vs Estados Unidos de América. 4 de abril de 2001. Pág. 32 y 33

Caso Loren Laroye Riebe Star, Jorge Barón Guttlein y Rodolfo Izal Elorz Vs México. 13 de abril de 1999. Pág. 33

Informe sobre la Situación de derechos humanos de las personas que buscan asilo dentro del Sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado, 2000, OEA/Ser.L/V/II. 106 doc.40 rev. Pág. 33

Informe N° 38-96, Caso X & Y (Argentina), 15 de octubre de 1996. Pág. 37

- **Comité de derechos humanos.**

Comunicación No. 291/1988, CCPR/C/38/D/291/1988, párr. 7.2 (5 de abril de 1990). Pág. 33

Comunicación No. 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993 (30 de abril de 1997). Pág. 33

Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004. Pág. 30

- **Comité contra la tortura.**

Observación general N°1, sobre la aplicación del artículo 3 en el contexto del artículo 22 de la Convención, U.N. Doc. CAT, A/53/44, 21 de noviembre de 1997. Pág. 30

- **Alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados.**

Manual y Directrices Sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Reedición Ginebra, diciembre de 2011. HCR/1P/4/ENG/REV.3. Pág. 21

Manual Interpretación del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados párr. 149; J. Hathaway, pág. 191; C.P.R. (2 ch.) (Bélgica), 29 de junio de 1994, F274. Pág. 22

Directrices sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión del artículo 1F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 en situaciones de afluencia masiva. Pág. 23 y 37

Conclusiones sobre la protección internacional de los refugiados aprobadas por el Comité Ejecutivo. 1991 (42 período de sesiones del Comité Ejecutivo) N°65 (XLII) Conclusiones generales, párr. c. Pág. 27

- **Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.**

Caso Deweer vs. Bélgica. Aplicación No. 6903/75, 27 febrero de 1980. Pág. 19

Caso Foti y otros vs. Italia. Aplicación No.7604/76; 7719/76; 7781/77; 7913/77,10 diciembre 1982. Pág. 19

Caso de Jong, Baljet y van den Brink vs. Los Países Bajos. Aplicación No. 8805/79 8806/79 9242/81, 22 mayo 1984. Pág. 19

Caso Torres vs Finlandia. No. 291/1988, CCPR/C/38/D/291/1988, 5 de abril 1990. Pág. 33

Caso de Bozano vs. France. Aplicación No. 9990/82, 18 de diciembre 1986. Pág. 20

Caso Willis vs. Reino Unido. Aplicación No. 36042/97, 11 de junio 2002. Pág. 25

Caso Okpisz vs. Alemania. Aplicación No. 59140/00, 25 de octubre 2005. Pág. 25

Caso Soering vs. Reino Unido. Aplicación No. 14038/88, 7 de Julio 1989. Pág. 27 y 28

Caso Chahal vs. Reino Unido. Aplicación No. 22414/93, 15 de noviembre 1996 Pág. 27 y 29

Caso Sufi y Elmi vs. Reino Unido. Aplicación No. 8319/07 y 11449/07, 28 de junio 2011. Pág. 28

Caso Vilvarajah y otros vs. Reino Unido. Aplicación No. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 y 13448/97, 30 de octubre 1991. Pág. 28

Caso Ahmed vs. Austria. Aplicación No. 25964/94, 17 de diciembre 1996. Pág. 28

Caso HLR vs. Francia. Aplicación No. 24573/94, 29 abril de 1997. Pág. 28

Caso Jabari vs. Turquía. Aplicación No. 40035/98, 11 julio 2000. Pág. 28

Caso Salah Sheekh vs. Holanda. Aplicación No. 1948/04, 11 de enero 2007. Pág. 28

Caso Saadi vs. Italia. Aplicación No. 37201/06, 28 de febrero 2008. Pág. 28 y 29

Caso Indelicato vs. Italia, Aplicación No. 31143/96, 18 de octubre de 2001, Pág. 29

Caso Ramírez Sánchez vs. Francia. Aplicación No. 59450/00, 4 de julio del 2006. Pág. 29

Caso Hirsi Jamaa y otros vs. Italia. Aplicación No. 27765/09, 23 de febrero 2012. Pág. 29

Caso T.I. vs. Reino Unido. Aplicación No. 66069/09,130/10 y 3896/10, 9 de julio 2013. Pág. 30

Caso Shamayev y otros Vs. Georgia y Rusia. Aplicación No.36378/02, 12 de abril 2005. Pág. 30

Caso Cruz Varas y Otros Vs. Suecia. Aplicación No.15576/89, 20 de marzo 1991. Pág. 30

Caso Nizomkhon Dzhurayev vs. Rusia. Aplicación No. 31890/11, 3 de octubre 2013. Pág. 30

Caso Othman (Abu Qatada) vs. Reino Unido. Aplicación No. 8139/09, 17 de enero 2012. Pág. 30

Caso Herczegfalvy vs. Austria. Aplicación No. 10533/83, 24 de septiembre 1992. Pág. 33

Caso Mehemi vs. Francia. Aplicación No. 85/1996/704/896, 26 septiembre 1997. Pág. 37

Caso de T y K vs Finlandia. 12 de julio 2001. Pág. 36

Caso Johansen vs. Noruega, 7 de agosto 1996. Pág. 36

Caso Bouchelikia vs. Francia, Sentencia de 1998. Pág. 37

Caso McCann y otros vs. Reino Unido. No.19009/04, 13 mayo 2008. Pág. 34

Caso Buchberger vs. Austria, Sentencia de 20 de diciembre de 2001. Pág. 36

Caso Elsholz vs. Alemania, Sentencia de 13 de Julio de 2000. Pág. 36

Caso Bronda vs. Italia, Sentencia de 9 de junio de 1998. Pág.13

- **Tribunal de Justicia de la Unión Europea.**

Sentencia de la Gran Sala: Asuntos acumulados B (asunto C-57/09), y D (asunto C-101/09), 9 de noviembre de 2010. Pág. 22 y 23

III. OBJETO DE LA DEMANDA.

Los representantes de las víctimas, de conformidad al artículo 25 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (la Corte IDH o la Corte) sometemos el presente caso, coincidiendo con lo planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo con relación al caso de Gonzalo Belano y las otras 807 personas provenientes de Puerto Waira (PW), con el objeto que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado de Arcadia por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 7, 8, 17, 19, 24, 25, 22.7, y 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la Convención o la CADH), todos ellos en función de las obligaciones de respeto y garantía establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado internacional.

IV. HECHOS.

▪ Antecedentes de Puerto Waira y Arcadia.

Puerto Waira es un país centroamericano que limita al norte con Tlaxcochitlan. En 2014, era el país más violento del hemisferio occidental, con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes, enfrentando un grave problema de inseguridad y violencia debido a las pandillas, quienes cuentan entre 45,000 a 60,000 miembros, mientras que la Policía Nacional cuenta con 14,700 agentes.

En este contexto, la violencia, la incapacidad de las autoridades, los altos niveles de impunidad, y los altos índices de pobreza y desigualdad, generaron que durante los últimos años muchas personas en situación de pobreza migraran a Arcadia.

Por su parte, Arcadia es un país desarrollado que cuenta con una democracia sólida, una marcada separación de poderes, una fuerte institucionalidad pública, su economía es una de las más poderosas de la región y, ha sido un lugar de destino para las personas migrantes.

- **La migración masiva.**

El 12/07/2014 una caravana de más de 7,000 personas waiwaneses, en situación de pobreza, migró hacia Arcadia por vía terrestre. Después de 5 semanas de recorrido, el 15/08/2014, empezaron a llegar los primeros migrantes a la frontera sur de Arcadia; cientos de familias, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas mayores, la mayoría de ellos afrodescendientes formaban parte del grupo.

El 20/08/2014, el presidente de Arcadia anunció las siguientes medidas: abrir sus fronteras para el ingreso de personas provenientes de PW, y reconocer como refugiados *prima facie* a todos. El procedimiento consistió en acudir a las oficinas del CONARE, formalizar su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, realizar una breve entrevista y obtener el documento que les reconocería como refugiados y su permiso de trabajo. Las autoridades investigarían si la persona contaba con antecedentes penales.

- **Personas excluidas de la condición de refugiado.**

Se identificaron 808 personas con antecedentes penales, por lo que procedieron a detenerlas. Entre ellos se encontraba Gonzalo Belano, quien a los 14 años había sido reclutado a la fuerza para hacer parte de la pandilla de su barrio en PW, y además había estado en prisión de los 18 a los 21 años, sentenciado por extorsión, pero en julio 2014, tras salir de la cárcel, había decidido que no podía volver con la pandilla y para no estar en riesgo tenía que irse del país.

Los otros 807 waienses detenidos en Arcadia, habían cometido delitos en circunstancias similares a las del señor Belano, pero en todos los casos ya había cosa juzgada y cumplimiento de la sentencia.

Arcadia analizó cada una de las solicitudes de asilo de las personas que tendrían antecedentes penales y que se encontraban detenidas, y determinó que, en 729 de los 808 casos, las personas tendrían un “alto riesgo” de sufrir tortura y de que su vida corría peligro en caso de ser deportadas a PW; los 79 restantes contaban con una “probabilidad razonable”. Así, resolvían que las personas tenían un temor fundado de persecución, pero eran excluidas de la protección.

El presidente Javier Valverde hizo un llamado a los países para que apoyaran con la recepción de estas personas, pero el 21/01/2015, sin haber recibido respuesta, se publicó un Decreto Ejecutivo que ordenaba la deportación de las personas que habían sido excluidas del reconocimiento de la condición de refugiado.

El 2/03/2015, Arcadia y Tlaxcochitlán, firmaron un acuerdo donde se establecía que las autoridades de Arcadia podrían devolver a Tlaxcochitlán a las personas que hubiesen intentado ingresar de manera irregular desde dicho país. Así, el 16/03/2015, las autoridades de Arcadia procedieron a devolver a Tlaxcochitlán a 591 personas que habían sido excluidas por tener antecedentes penales y que no habían interpuesto recursos, enviando al resto de 217 personas hasta el 5/05/2015, ya que habían interpuesto un recurso de amparo para detener la deportación, pero el 22/03/2015, el Juzgado Migratorio de Pima confirmó las órdenes de deportación, y pese a que interpusieron un recurso de revisión, el 30/04/2015, también fue negado.

Tras su llegada a Tlaxcochitlán, las 808 personas fueron recluidas, y el 15/06/2015, fueron deportadas hacia PW por las autoridades migratorias de Tlaxcochitlán. En este contexto, el

28/06/2015, pocos días después de la deportación, el señor Gonzalo Belano al igual que otras 29 personas deportadas habían sido asesinadas, y 7 más habían sido objeto de desapariciones forzadas.

Ante esta situación, una Clínica Jurídica a la que acudió la familia de Gonzalo Belano, presentó una demanda por actividad administrativa irregular y reparación integral del daño en Arcadia el 15/11/2015, la cual fue rechazada.

El 20/01/2016, la Clínica Jurídica interpuso una petición ante la Comisión IDH a nombre de las 808 personas deportadas. Posteriormente, el 1/08/2018, la CIDH emitió su Informe de Fondo, atribuyendo responsabilidad internacional a Arcadia por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 4, 7, 8, 22.7, 22.8, 17, 19, 24, 25 de la CADH, todos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Gonzalo Belano y otras 807 PW. El caso fue sometido ante la jurisdicción de la Corte IDH el 5 de noviembre de 2018.

V. CUESTIONES PRELIMINARES

▪ Competencia.

Arcadia ratificó la CADH y aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH en 1971, por lo que este Tribunal es competente para conocer del caso.

▪ Excepción por falta de agotamiento de los recursos internos.

Esta Corte ha realizado una interpretación amplia del artículo 46.1.a) de la Convención¹. Por ello, ha reiterado; i) que tal excepción ha de ser interpretada como una defensa disponible para

¹ Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. párr. 22, y Caso Mémoli Vs. Argentina. párr. 47.

el Estado y, como tal, puede renunciarse a ella, ya sea expresa o tácitamente², ii) que un cuestionamiento al ejercicio de la jurisdicción de la Corte basada en la supuesta falta de agotamiento de los recursos internos, debe ser presentada en el momento procesal oportuno³, esto es, en la etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión; de lo contrario, el Estado habrá perdido la posibilidad de presentar esa defensa ante este Tribunal⁴, iii) y que el Estado que presenta esta excepción debe especificar los recursos internos que aún no se han agotado, así como demostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran adecuados, idóneos y efectivos⁵.

En el caso *sub judice*, Arcadia no fue claro, ni explícito en la invocación de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, pues alegó, que “en particular 591 personas no presentaron ningún recurso”; sin embargo, no se hizo referencia alguna sobre los recursos que se debieron de agotar; ni a la efectividad de estos. Pese a que, de acuerdo con la carga de la prueba aplicable a la materia, el Estado que alega el no agotamiento debe señalar los recursos internos que deben agotarse, y proporcionar la prueba de su efectividad.⁶

Además, la Corte ha señalado de conformidad con su jurisprudencia⁷ y la jurisprudencia internacional⁸, que no es tarea de la Corte, ni de la Comisión, identificar *ex officio* cuáles son los recursos internos pendientes de agotar, sino que incumbe al Estado el señalamiento oportuno de

² Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. párr. 88; Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. párr. 40; Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. párr. 43; y Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Parr.14

³ Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. párr. 49; Caso de las Niñas Yean y Bosico, párr. 61; y Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares, párr. 135.

⁴ Corte I.D.H. Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. párr. 19; Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. párr. 18; y Caso Vélez Loor Vs Panamá. párr. 20

⁵ Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, párr. 91; Caso Garibaldi Vs. Brasil., párr. 46, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, párr. 28; y caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Párr. 19.

⁶ Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Párr. 84

⁷ Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. 88, y Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina, párr. 25.

⁸ TEDH. Caso Deweer Vs. Bélgica, párr. 26; Caso Foti y otros Vs. Italia, párr. 48, y Caso de Jong, Baljet y van den Brink Vs. Los Países Bajos, párr. 36.

los recursos internos que deben ser agotados, y su efectividad⁹, pues, no compete a los órganos internacionales subsanar la falta de precisión de los alegatos del Estado¹⁰.

En consecuencia, toda vez que Arcadia no señaló cuales eran los recursos que debieron agotarse, así como la disponibilidad, idoneidad y efectividad de estos, debe considerarse que dicho planteamiento interpuesto ante esta Corte resulta ser extemporáneo y por ello, es procedente solicitar a esta Corte, desestime dicha excepción preliminar.

▪ **Excepción por la indeterminación de las víctimas del caso.**

A partir del artículo 35.1 del Reglamento de la Corte, el informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención debe contener “todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas”. En este sentido, corresponde a la Comisión y no a la Corte IDH, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte¹¹. No obstante, el artículo 35.2 del Reglamento establece que “cuando se justificare que no fue posible identificar a alguna o algunas presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su oportunidad si las considera víctimas.”¹²

Al respecto, los hechos del caso versan sobre la violación de derechos humanos en perjuicio de personas refugiadas, entre los cuales algunos perdieron la vida, otros fueron desaparecidos, detenidos y expulsados de Arcadia.

⁹ Corte IDH., Caso Vélez Loor Vs Panamá, párr. 24.

¹⁰ Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, párr. 23, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname, párr. 16. Caso Usón Ramírez, vs. Venezuela, párr. 22; y Vélez Loor Vs Panamá, párr. 24. TEDH, Case of Bozano Vs. France, párr. 46.

¹¹ Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. párr. 98, y Caso Furlan y familiares. párr. 277.

¹² Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Párr. 31.

Lo anterior permite considerar que, por una parte, los hechos tratan sobre violaciones colectivas y, por otra, que la calidad de refugiados de las presuntas víctimas expulsadas y su condición de vulnerabilidad y marginalización puede presentar complejidades en su efectiva identificación y determinación.

Por tanto, se estima que este caso se enmarca en el supuesto del artículo 35.2 del Reglamento, y se solicita que se consideren como presuntas víctimas a aquellas personas anunciadas por la Comisión en su informe de fondo.

VI. ANALISIS SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.

▪ La denegatoria de asilo de Gonzalo Belano y otros 807 wairenses.

De acuerdo con la Convención de 1951, era del conocimiento de la autoridades migratorias de Arcadia, que Gonzalo Belano y las otras 807 personas wairenses debían ser considerados como refugiados, aun y cuando no existiera una determinación formal de su condición¹³, pues, el hecho de reunir los requisitos enunciados en la definición -al encontrarse huyendo de los grupos delincuenciales que podían asesinarlos o torturarlos por abandonar las pandillas a las cuales los habían obligado a pertenecer y a cometer ilícitos- les daba tal calidad, dado que, el reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter constitutivo, sino declarativo.¹⁴

De ahí que, este grupo de personas debieron ser reconocidas como refugiados *prima facie*¹⁵, al igual que el resto de migrantes. Sin embargo, el Estado en el entendido que el mismo artículo 1 de la Convención de 1951, en sus incisos D, E y F, establece una serie de “cláusulas de exclusión”

¹³ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Párr. 145.

¹⁴ ACNUR. Manual y Directrices Sobre Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Párr. 28.

¹⁵ Corte IDH. OC 21/14. Párr. 99.

que permiten no aplicar la protección de la Convención, aun y cuando, la persona cumpla con la definición de refugiado¹⁶, separó de dicha protección a Gonzalo Belano y a las otras 807 personas.

De este modo, el Estado le negó su derecho de recibir asilo a estas 808 personas refugiadas, aplicando de forma automática la cláusula de exclusión 1F (b), al considerarse que el hecho de tener antecedentes penales y haber cometido un grave delito común, bastaba para encontrarse comprendido en la misma y, por ende, estos no debían ser aptos para ser reconocidos formalmente como refugiados, desconociendo que esta Corte IDH¹⁷ y el ACNUR¹⁸, han señalado que estas cláusulas de exclusión deben ser interpretadas de forma restrictiva.

Esto último, atendiendo a que las normas que limiten o restringen el ejercicio o goce de los derechos humanos siempre deben aplicarse en sentido restrictivo y no pueden aplicarse analógicamente limitaciones de derechos a otros derechos, ni tampoco deben extenderse o ampliarse las limitaciones más allá de lo expresamente autorizado¹⁹.

En ese sentido, debe destacarse que la cláusula de exclusión de que se trata fue instituida con el fin de excluir del estatuto de refugiado, a las personas consideradas indignas de la protección inherente a este y de evitar que la concesión de dicho estatuto permitiera a los autores de determinados delitos graves eludir la responsabilidad penal²⁰, de ahí que, debe entenderse que no todas las personas que cometieren un delito grave común han de ser excluidos bajo los términos del artículo 1F (b).²¹

¹⁶ Corte IDH. Caso Familia Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Párr. 146

¹⁷ Corte IDH. OC 25/18 párr. 99

¹⁸ Manual del ACNUR, párrafo 149; J. Hathaway, pág. 191; C.P.R. (2 ch.) (Bélgica), 29 de junio de 1994, F274.

¹⁹ Nogueira Alcalá, Humberto. “Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: doctrina y jurisprudencia”. Pág. 77.

²⁰ TJUE. Sentencia de la Gran Sala: Asuntos acumulados B (asunto C-57/09), y D (asunto C-101/09). Párr. 104

²¹ The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, UNHCR, diciembre de 1996, párrafos 6 y 7.

No obstante, las autoridades de Arcadia hicieron una interpretación errónea, pese a que en todos los casos, para determinar si una persona es o no merecedora de la protección internacional como refugiado, se debe hacer una valoración individualizada.²² Además, para poder justificar la exclusión era necesario establecer la responsabilidad individual en relación a un delito común dentro del ámbito de aplicación del artículo 1F (b), incluyendo los procesos de exclusión concernientes a los excombatientes o a los miembros de determinados grupos u organizaciones,²³ como era el caso de Gonzalo Belano y de las otras 807 personas a quienes se les vinculaba con los grupos delincuenciales de su país de origen.

Por ello, la autoridad migratoria se encontraba en la obligación de examinar, concretamente, si se configuraban elementos tales como; i) el papel que desempeñó efectivamente la persona interesada en la perpetración de los actos en cuestión, ii) su posición en el seno de la organización, iii) el grado de conocimiento que tenía o se suponía que tenía de las actividades de esta, y iv) las posibles presiones a las que pudo verse sometida u otros factores que pudieron influir en su comportamiento²⁴.

Empero, en el *sub judice*, estos parámetros no fueron visualizados, porque de haberlo sido, Gonzalo Belano y las otras 807 personas wairenses hubieran sido reconocidas formalmente como refugiados en Arcadia, pues como consta en los hechos del caso, el carácter cognitivo y volitivo de cometer estos delitos graves comunes, estaba supeditado a las órdenes de los jefes de los grupos de pandillas que lo habían obligado no solo a permanecer con ellos, sino también a delinquir.

²² ACNUR. Directrices del ACNUR sobre la aplicación de las cláusulas de exclusión del Artículo 1F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 en situaciones de afluencia masiva. Pág. 7

²³ ACNUR, Directrices sobre exclusión, párrafos 18-23; y Documento del ACNUR sobre exclusión, párrafos 50-75.

²⁴ TJUE. Sentencia de la Gran Sala: Asuntos acumulados B (asunto C-57/09), y D (asunto C-101/09). Párr. 97

En todo caso, aunque las autoridades de migración no tomaron en cuenta tales apreciaciones, lo crucial radica en que, a partir de que el propósito primario de esta cláusula es privar a los culpables de atrocidades y delitos comunes graves de la protección internacional normalmente brindada a los refugiados, pues con ello se impide que tales personas abusen de la institución del asilo para evadir la rendición de sus cuentas ante la justicia,²⁵ en este caso, debe dilucidarse que estas personas ya habían cumplido la sentencia por dichos delitos y se encontraba como cosa juzgada, por tanto, la cláusula de exclusión del artículo 1F (b) de la Convención de 1951 no les era aplicable.

En consecuencia, se solicita a esta Corte que declare la responsabilidad internacional de Arcadia por la violación del artículo 22.7 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH.

▪ **Trato discriminatorio hacia Gonzalo Belano y las otras 807 personas wairenses.**

El rechazo de la solicitud del reconocimiento formal de asilo no solo generó una violación al derecho de buscar y recibir asilo, sino también al derecho de igualdad ante la ley y no discriminación contenido en el artículo 24 de la CADH, que prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación.²⁶

En esa dirección, las autoridades de Arcadia fundamentaron su decisión de aplicar la cláusula de exclusión 1F (b) de la Convención de 1951 en el hecho de que las 808 personas en cuestión tenían antecedentes penales, lo que generó un trato discriminatorio, precisamente, porque la

²⁵ La aplicación de las cláusulas de exclusión: el artículo 1F de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Pag 2

²⁶ Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Párr. 186.

discriminación significa tratar de manera diferente, sin una justificación objetiva y razonable, a las personas en situaciones similares.²⁷

En otras palabras, la diferencia de trato se basó en el estigma con el que generalmente carga una persona con antecedentes penales para negar el reconocimiento formal de la condición de refugiado.

Todo esto, bajo la noción de que un estigma es un atributo que desacredita a un individuo, que lo reduce de una persona completa y común a una marcada y disminuida.²⁸ De ahí que, se explica la devaluación o desvalorización que se hace de la persona que tiene antecedentes penales o que cometió un delito, a pesar de haber cumplido su condena.

Sin embargo, esto es aún más grave, debido a que cuando se cree, por definición, que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana, esto provoca que se practiquen diversos tipos de discriminación, dado que, se construye una teoría del estigma o una ideología que sirve para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona.²⁹

De esta forma, las autoridades migratorias de Arcadia entendieron que el estigma de cargar antecedentes penales justificaba el hecho de que estas personas representaran un riesgo para la seguridad pública y, por tanto, se encontraban habilitados para tratarlos de manera diferente en relación con las demás personas que no los poseían, y así, excluirlos del reconocimiento de la condición de refugiado.

²⁷ TEDH. *Willis v. Reino Unido*, § 48, CEDH 2002- IV, y *Okpisz v. Alemania*, § 33.

²⁸ Goffman, Erving (1986). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Nueva York: Simon & Schuster. Pág. 13.

²⁹ Goffman, Erving (1986). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Nueva York: Simon & Schuster. Pág. 15.

No obstante, esta Corte en reiteradas ocasiones ha señalado, que es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incurso en tal situación de inferioridad.³⁰

Además, independiente de cuál sea el origen o la forma que asuma, todo tratamiento que pueda ser considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención es *per se* incompatible con la misma³¹. Por ello, queda claro que el estigmatizar a estas 808 personas por tener antecedentes penales a pesar de haber cumplido su condena, no solo generó un trato diferenciado con respecto al resto, sino que también se les impuso una carga desproporcionada, debido a que, dichos antecedentes siempre iban a seguir allí y de ese modo, siempre serían limitados en su derecho a recibir asilo, así como el disfrute de otros derechos humanos.

Por todo lo anterior, y en la medida que la decisión de excluir a las 808 personas del reconocimiento formal de la condición de refugiado se basó en fines que repugnan a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana³², es pertinente solicitar que esta Corte declare que Arcadia es responsable internacionalmente por la violación del artículo 24 de la CADH con respecto a Gonzalo Belano y las otras 807 personas wairenses.

- **La devolución indirecta de Gonzalo Belano y de las otras 807 personas wairenses.**

³⁰ Corte IDH. OC-17/02, párr. 45; OC-18/03, párr. 87.

³¹ Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Párr. 268.

³² Corte IDH. OC-17/02, párr. 47.

Posteriormente, una vez que Arcadia había rechazado el reconocer formalmente como refugiados a Gonzalo Belano y a las otras 807 personas wairenses, éste los devolvió en dos grupos a Tlaxcochitlán, pasando por alto la prohibición de *non-refoulemen*³³, reconocida de forma expresa e implícita en diversos tratados³⁴, y que constituye una obligación absoluta e inderogable, y una norma imperativa del derecho internacional consuetudinario (*Jus Cogens*)³⁵, que constituye la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas o asiladas³⁶.

En ese sentido, el Estado conocía de su obligación de no devolver o expulsar a una persona solicitante de asilo, cuando existiera la posibilidad de sufrir algún riesgo de persecución³⁷ o estuviere expuesta a sufrir algún tipo de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes³⁸. Esta prohibición, opera no solo si se envía a la persona a su país de origen, si no también cuando se manda a un tercer Estado que pueda devolverlos al mismo (devolución indirecta)³⁹, como lo hizo Arcadia enviándolos a Tlaxcochitlan.

Bajo esta lógica, Arcadia no puede argüir que desconocía el riesgo que implicaba devolver a Gonzalo Belano y a las otras 807 personas, toda vez que había realizado estudios que detallaban que en 729 de los 808 casos, las personas tendrían un “alto riesgo” de sufrir tortura y que su vida corría peligro en caso de ser retornadas o deportadas a PW, y aun así estas personas fueron devueltas, en el entendido que representaban un peligro para la ciudadanía, al encontrárseles que

³³ TEDH, Caso Soering Vs. Reino Unido, párr. 88.

³⁴ Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 33); Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 3); Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 3); Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (art. 7).

³⁵ TEDH. Chahal v. Reino unido. § 80.

³⁶ Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Conclusiones sobre la protección internacional de los refugiados aprobadas por el Comité Ejecutivo. 1991 (42 período de sesiones del Comité Ejecutivo) N° 65 (XLII) Conclusiones generales, párr. c.

³⁷ Corte IDH, Caso Familia Pacheco Tineo Vs Bolivia. Párr. 135

³⁸ Informe presentado por el Relator Especial sobre la tortura, Sr. Theo van Boven, Los Derechos Civiles y Políticos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con la Tortura y la Detención, párr. 14.

³⁹ Corte IDH, Caso Familia Pacheco Tineo Vs Bolivia. Párr. 135.

tenían antecedentes penales, lo cual es inadmisibles, en la medida que, ya ha quedado demostrado que no les era aplicable la cláusula de exclusión del artículo 1F (b) de la Convención de 1951.

Además, debe hacerse hincapié, en que una cosa es el proceso para determinar el reconocimiento de la condición de refugiado, y otra muy distinta es el examen minucioso que se debe de llevar a cabo por la autoridad competente para determinar si es viable devolver a una persona⁴⁰, máxime cuando se ven involucrados otros derechos como la vida y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes⁴¹.

En el caso en concreto, este análisis se realizó, pero no tuvo ninguna relevancia, porque en resumidas cuentas se ordenó devolver a estas 808 personas y, seguramente, hasta este punto, Arcadia justificará que representaban un peligro para la seguridad pública, pese a que se conocía que existía un riesgo de ser asesinados o torturados. Sin embargo, el argumento basado en el balance del riesgo de daño si la persona es devuelta versus la peligrosidad que él o ella representa para la comunidad si no es devuelta es erróneo⁴².

Esto, bajo el análisis de que, los conceptos de "riesgo" y "peligrosidad" en este contexto no se prestan a una prueba de equilibrio porque son nociones que solo pueden evaluarse de forma independiente⁴³. De igual forma, es de hacer ver que la posibilidad de que ellos representaran una amenaza seria para la comunidad si no eran devueltos, no reduce de ninguna manera el grado de riesgo de malos tratos al que la persona puede estar sujeta en el retorno⁴⁴.

⁴⁰ TEDH. Sufi y Elmi v. Reino Unido, §132

⁴¹ TEDH. Soering v. Reino Unido, §§ 90-91; Vilvarajah y otros c. Reino Unido, § 103; Ahmed c. Austria, § 39; HLR c. Francia, § 34, Informes 1997 - III; Jabari c. Turquía, § 38, CEDH 2000-VIII; y Salah Sheekh v. Holanda, § 135.

⁴² TEDH. Saadi c. Italia, §§ 139

⁴³ TEDH. Saadi c. Italia, §139

⁴⁴ TEDH. Saadi c. Italia, §124-125

Por ello, el TEDH ha sostenido que en casos como el presente, en el que se hayan aplicado cláusulas de exclusión, específicamente la del artículo 1F (b) y se quiera devolver a la persona, deberá valorarse que al conocer que la prohibición de la tortura y de los tratos o penas inhumanos o degradantes es absoluta, independientemente de la conducta de la víctima, o la naturaleza del delito presuntamente cometido por el solicitante es irrelevante a los efectos del artículo 3 del Convenio Europeo.⁴⁵

Lo mismo sucede con la idea maliciosa del Estado de no devolver directamente a estas 808 personas a PW, si no a Tlaxcochitlán, apegándose a un acuerdo que tenían, que de igual forma no lo exonera de su responsabilidad internacional⁴⁶, porque este accionar de Arcadia se apega a la figura de la devolución indirecta, que se refiere a una expulsión hacia a un Estado desde donde los migrantes pueden ser deportados hacia otro estado, sin poder beneficiarse de un examen adecuado de su situación.⁴⁷

De esta manera, correspondía a Arcadia, autor de la expulsión, asegurarse de que el país intermediario ofrecía suficientes garantías para evitar que el individuo en cuestión fuera devuelto a su país de origen sin haber procedido a realizar una evaluación de los riesgos potenciales⁴⁸, pero esto no fue así, estas personas siempre fueron devueltas al llegar a Tlaxcochitlán, sin otro examen previo, aparte del que Arcadia les había realizado.

Por tanto, y en la medida que Arcadia estaba obligado a asegurarse de que Gonzalo Belano y las otras 808 personas en cuestión no correrían un riesgo auténtico de ser sometidos a tratos

⁴⁵ Chahal v. Reino Unido, §79, Indelicato v. Itali, §30, y Ramírez Sánchez v. Francia, §115-16.

⁴⁶ TEDH, Caso Hirsi Jamaa y otros c. Italia. Párr. 128.

⁴⁷ Saadi c. Italia, §124-125

⁴⁸ Hirsi Jamaa y Otros c. Italia Párr. 147

contrarios a la vida y la prohibición de la tortura en caso de ser repatriado⁴⁹, y aun así no lo hizo, y por el contrario los expuso a que los grupos delincuenciales materializaran los fundados temores que tenían estas personas una vez estando en PW, es procedente, solicitar que se declare a Arcadia responsable internacionalmente por la violación del artículo 22.8, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la CADH.

▪ **El asesinato de Gonzalo Belano y 28 personas mas que fueron deportadas a PW.**

Al tratarse de la muerte de 29 personas como consecuencia de una devolución indirecta, Arcadia primero, faltó a su obligación de no extraditar, deportar, expulsar o hacer salir de algún modo de su territorio a una persona cuando haya razones de peso para creer que existe un riesgo real de daño irreparable a la vida e integridad personal, en caso de tortura o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el país hacia el que se va a efectuar esa salida forzada o en cualquier país al que la persona sea expulsada posteriormente.⁵⁰

Luego, provocó que dicho riesgo se materializara cuando Gonzalo Belano y las otras 28 personas fueron asesinadas a pocos días de su llegada a PW, afectando así el derecho a la vida, el cual juega un papel fundamental en la CADH, al ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos⁵¹, por lo que, los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de este derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.⁵²

⁴⁹ TEDH. Case T.I. contra Reino Unido Párr. 342

⁵⁰ ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párr. 12. ONU, Comité contra la tortura. Observación general N°1, sobre la aplicación del artículo 3 en el contexto del artículo 22 de la Convención, párr. 1. TEDH, Caso Shamayev y otros Vs. Georgia y Rusia, párr. 335, y Caso Cruz Varas y Otros Vs. Suecia, párr. 69 y 70; Caso Nizomkhon Dzhurayev Vs. Rusia, párr. 105, y Caso Othman (Abu Qatada) Vs. Reino Unido, párr. 185.

⁵¹ Corte IDH. Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador. Párr. 97, Caso Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela, párr. 100; Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador, párr. 130. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú, Párr. 132 y 133.

⁵² Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, párr. 125; Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. párr. 258.

Asimismo, esta Corte ha reiterado que para verificar la responsabilidad internacional de un Estado por la muerte de una o varias personas, deberá verificarse que al momento de los hechos, existía una situación de riesgo real e inminente para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y que las autoridades conocían o debían tener conocimiento, y que no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo.⁵³

En vista de lo anterior, Arcadia no puede negar que no tenía conocimiento, pues el mismo Estado había constado la existencia de una situación de riesgo en contra de la vida de estas personas. Tampoco, pueden escudarse en señalar que fueron particulares quienes los asesinaron, porque es suficiente la demostración de omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste⁵⁴, como sucedió en el presente caso.

Por ello, y en tanto que se han verificado acciones y omisiones que permitieron la perpetración del asesinato de 29 personas deportadas, al faltar el Estado en su obligación de devolverlos⁵⁵, aun y cuando tenía conocimiento y en sus manos estaba evitar un daño irreparable a la vida de dichas personas y aun así no lo hizo, debe declararse su responsabilidad internacional.

En consecuencia, se solicita a esta Corte declarar que Arcadia es responsable por la muerte de Gonzalo Belano y las otras 28 personas asesinadas en PW.

⁵³ Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Párr.184.

⁵⁴ Caso Masacre de Pueblo Bello, párr. 112; Caso de la "Masacre de Mapiripán", párr. 110; y Caso 19 Comerciantes, párr. 141.

⁵⁵ Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Párr. 263.

- **La detención de Gonzalo Belano y las otras 807 personas.**

En el caso en estudio, se tiene que las autoridades migratorias de Arcadia detuvieron a Gonzalo Belano y a las otras 807 personas wairenses, a pesar de que la libertad debe ser la regla general mientras se resuelve sobre la situación de la persona, ya que -la detención- constituye la medida más severa que se puede imponer. Por ello, es necesario que se aplique excepcionalmente.⁵⁶

En el mismo sentido, al ser la detención preventiva una medida cautelar no punitiva⁵⁷, esta solo debía aplicarse como último recurso y para ello, era necesario que Arcadia hubiese evaluado otras medidas menos lesivas que no fuera la restricción de la libertad personal, (como el control por GPS), la fianza o la liberación que deben ser también medidas razonables que guarden relación de proporcionalidad con el cumplimiento de un objetivo legítimo del Estado⁵⁸.

No obstante, el Estado se justificará en señalar que a este grupo de personas no se les podía imponer otro tipo de medidas, pues tenían antecedentes penales y, como consecuencia, estos no solo representaban una amenaza potencial para la seguridad pública, sino que también podían eludir la eventual deportación.

Sin embargo, esto último resulta insostenible, debido a que, el argumento de que la persona en cuestión representa una amenaza para la seguridad pública, sólo es aceptable en circunstancias excepcionales en las cuales existan serios indicios del riesgo que representa una persona⁵⁹, y en este caso, Arcadia no tenía ningún indicio más que el saber que estas personas tenían antecedentes

⁵⁶ Caso López Álvarez Vs. Honduras, párr. 67; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, párr. 196; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, párr. 74 y Caso Tibi Vs. Ecuador, párr. 106

⁵⁷ Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 77; y Caso Barreto Leiva Vs Venezuela 17/11/09, párr. 121.

⁵⁸ Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso. Párr. 41.

⁵⁹ CIDH, Rafael Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos) párr. 221

penales lo cual no es suficiente para sustentar la detención de un inmigrante una vez ha cumplido la condena penal.⁶⁰

Dada esa situación, Arcadia no tenía elementos para explicar las circunstancias particulares por las cuales se consideraba ese riesgo, y por ello no existieron razones que sustentaran la procedencia de la detención y tampoco fueron precisadas en la correspondiente decisión⁶¹ que adoptaron, por lo que, la detención no se encuentra justificada.

De igual forma, la detención de estas 808 personas debió mantenerse únicamente durante el plazo más breve posible⁶², dado que, la detención preventiva se halla limitada por el principio de proporcionalidad⁶³, en virtud del cual una persona migrante no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada⁶⁴, de ahí que, el principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido.⁶⁵

Por consiguiente, debe ofrecerse sin demora un control judicial de supervisión,⁶⁶ mas aún en situaciones de detención continuada y, esto necesariamente incluye la supervisión en intervalos regulares⁶⁷ y que a su vez, el detenido tenga oportunidad de estar representado por un asesor letrado u otro representante.⁶⁸ Además, la CIDH subraya que los procedimientos de revisión de la detención deben cumplir estrictamente las garantías del debido proceso, incluido el derecho

⁶⁰ CIDH, Rafael Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos) párr. 221

⁶¹ CIDH, Rafael Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos) párr. 221

⁶² Regla Mínimas de las Naciones Unidas, para la Administración de la Justicia de Menores. Artículo 13.1

⁶³ Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay, párr. 228; Caso López Álvarez Vs. Honduras, párr. 67; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador, párr. 93

⁶⁴ Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Párr. 234.

⁶⁵ Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 93 y Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. párr. 122.

⁶⁶ CIDH, Informe sobre la Situación de Derechos Humanos de las personas que buscan asilo dentro del sistema canadiense de determinación de la condición de refugiado, párr. 137.

⁶⁷ TEDH. Herczegfalvy c. Austria, párr. 75; Comité de Derechos Humanos de la ONU, Comunicación No. 560/1993, párr. 9.4

⁶⁸ CIDH Loren Laroye Riebe Starr y otros. Informe N° 49/99, Informe Anual de la CIDH 1999, párr. 70

a ser escuchado por un agente imparcial en la toma de decisiones, la oportunidad de presentar pruebas y refutar el argumento del Estado, así como la posibilidad de ser representado por un asesor jurídico.⁶⁹

Empero, Gonzalo y las otras 807 personas pasaron detenidos de forma prolongada durante aproximadamente seis meses sin que existiera una revisión de la medida, a pesar de que esta Corte ha reiterado, que cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad de la persona con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad, asimismo, este derecho del individuo trae consigo, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor diligencia y prontitud los procesos en los que la persona se encuentre privada de libertad⁷⁰.

Por tanto, y en vista de que no existieron elementos contundentes que justificaran la restricción de la libertad como la primera medida a adoptar y, de paso, se mantuviera a este grupo de personas detenidos de forma prolongada sin una revisión de esta, es oportuno solicitar a esta Corte, declare que Arcadia es responsable por la violación de la libertad personal de Gonzalo Belano y de las otras 807 personas.

▪ **La desaparición forzada de siete personas deportadas a PW.**

Bajo el amparo del artículo 7 el Estado es responsable por la desaparición forzada de siete personas⁷¹ que se encontraban dentro de las 808 personas que fueron deportadas a PW.

⁶⁹ CIDH, Rafael Ferrer-Mazorra y otros (Estados Unidos), párr. 213. TEDH. Torres c. Finlandia, Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 291/1988, párr. 7.2.

⁷⁰ Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina, párr. 70; y Caso Barreto Leiva Vs Venezuela. párr. 120.

⁷¹ Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. 2014, párr. 94.

Al respecto, esta Corte⁷² y el TEDH⁷³ han señalado que la desaparición forzada de personas es una violación pluriofensiva,⁷⁴ pues constituye una de las más graves y crueles violaciones de los derechos humanos, que no sólo produce una privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad personal, la seguridad y la propia vida del detenido⁷⁵.

Aunado a que, para considerar una desaparición forzada basta la privación de la libertad de una o más personas,⁷⁶ como aconteció en el presente caso, debido que Arcadia conocía los riesgos a los que serían expuestos este grupo de personas luego de ser deportadas, ya que al huir de los grupos delincuenciales estos podían aprehenderlos para asesinarlos o torturarlos.

Por tanto, dentro de los deberes del Estado se encontraba el adoptar medidas de prevención y protección [...] que promovieran la salvaguarda de los derechos humanos⁷⁷ al tener conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.⁷⁸

No obstante, decidió devolverlos y el riesgo se materializó, por lo que, Arcadia debe ser declarada responsable internacionalmente por la desaparición forzada de estas siete personas que fueron deportadas dentro del grupo de los 808, y en la medida que no se conoce a un el paradero de estas personas, esta vulneración por parte del Estado deberá ser considerado como continuada o permanente.⁷⁹

⁷² Corte IDH. Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 72

⁷³ TEDH. Caso McCann y otros c. Reino Unido. Párr. 136

⁷⁴ Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Párr. 81

⁷⁵ Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Párr. 66.

⁷⁶ Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá Párr. 106

⁷⁷ Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 175.

⁷⁸ Corte IDH. Caso González y otras (“campo algodoner”) vs. México, Párr. 280.

⁷⁹ Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Párr. 106.

- **Arcadia violó el derecho a la protección familiar y los derechos de los niños por la deportación de 808 wairenses.**

Una de las interferencias estatales más graves en la familia es la que tiene por resultado su separación o fraccionamiento.⁸⁰ Las separaciones legales del niño de su familia biológica sólo proceden si están debidamente justificadas en el interés superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, son temporales.⁸¹

Arcadia violó los derechos a la protección familiar y derechos de los niños en dos momentos: primero, al separar a las 808 personas de sus familias durante la detención y, segundo, al decidir sobre su deportación.

En relación con la detención, el solo hecho de que las 808 personas tuviesen antecedentes penales no es un argumento válido para considerar que representarían un peligro para la seguridad pública, por ende, debían aplicarse otras medidas alternativas menos lesivas para que estas personas se presentaran al proceso migratorio sin tener que separarlos de sus familias, pues, el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos, constituye un elemento fundamental en la vida de la familia⁸², por lo que el niño debe permanecer en su núcleo familiar.⁸³

Por otra parte, la decisión de deportar a estas 808 personas, agravó la situación, pues no valoró el perjuicio que inevitablemente se causaría en las relaciones familiares, más aun cuando en los grupos familiares se encontraban niños, y en ese sentido, cualquier actuación que afecte a un niño debe hallarse perfectamente motivada conforme a la ley, ser razonable y pertinente en el fondo y

⁸⁰ Corte IDH. Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, párr. 165

⁸¹ Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 125, y Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana, párr. 416.

⁸²TEDH. Caso Buchberger v. Austria, párrafo 35; Caso de T y K v. Finlandia, párrafo 151; Caso Elsholz v Alemania, párrafo 43; Caso Bronda v. Italia, párrafo 51; y Caso Johansen v. Noruega, párrafo 52.

⁸³ Corte IDH. OC-17/02, párrafo 77.

en la forma, atender al interés superior del niño y sujetarse a procedimientos y garantías que permitan verificar en todo momento su idoneidad y legitimidad.”⁸⁴

Arcadia argumentará, que una persona excluida no puede valerse del principio de la unidad familiar o el interés superior del niño, con el fin de garantizar su protección o su asistencia como refugiado⁸⁵. Sin embargo, esto no es aplicable automáticamente, debido a que, cualquier decisión que adopte un Estado con el fin de mantener el orden público, en caso de que interfiera con un derecho protegido por la Convención, debe ser necesaria en una sociedad democrática, es decir, debe estar justificada por una necesidad social imperante y ser proporcional con el fin legítimo que busca.⁸⁶

Sumado a lo anterior, la deportación no sólo implicó la separación de los niños de sus progenitores, sino también, en algunos casos, su institucionalización, pese a que, como se ha señalado, estas 808 personas no encajaban en la cláusula de exclusión y tampoco representaban una amenaza, lo que obligaba a Arcadia a respetar la vida familiar⁸⁷ de los mismos, y priorizar soluciones basadas en la familia o la comunidad antes que la institucionalización.⁸⁸

Además, el TEDH ha sostenido que pueden existir situaciones en las cuales el derecho a la asociación familiar pese más que el interés del Estado en deportar a un no ciudadano, aun cuando se considere que este plantea una amenaza para la sociedad y el orden público.⁸⁹

⁸⁴Corte IDH. OC-18/03, párrafos 112-114.

⁸⁵ACNUR, Directrices sobre Exclusión, párrafo 29; y Documento del ACNUR sobre Exclusión, párrafos 94-95.

⁸⁶TEDH. Caso Mehemi v. Francia, párrafo 34 y Caso Bouchelikia v. Francia, párrafos 65 y 48.

⁸⁷CIDH. Informe N° 38-96, Caso X & Y (Argentina), párrafo 96.

⁸⁸ Comité Internacional de la Cruz Roja y otros, Directrices Generales Inter-Agenciales sobre Niñas y Niños No Acompañados y Separados, enero de 2004, pág. 26. OC-21/14, párr. 167.

⁸⁹TEDH. caso Mehemi v. Francia, párrafo 34 y caso Bouchelikia v. Francia, párrafos 65 y 48.

Por lo anterior, y en el entendido que para que se produzca una violación a la vida familiar debe producirse en virtud de una acción u omisión específica del Estado⁹⁰ y al haber tenido el Estado la obligación de proteger el núcleo familiar,⁹¹ así como garantizar el derecho que todo niño tiene de permanecer con su familia⁹² y, aun así, no lo hizo, es pertinente, solicitar a esta Corte declare a Arcadia responsable por separar a las familias y no tomar en cuenta el interés superior de los niños que habían llegado con las 808 wairenses deportados.

▪ **Arcadia violó las garantías judiciales a Gonzalo Belano y los otros 807 wairenses.**

La calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos⁹³, en consecuencia, es deber de los Estados garantizar a las personas migrantes el derecho a obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas.⁹⁴

En esta lógica, el debido proceso [...] no sólo debe aplicarse en el proceso penal⁹⁵, por tanto, las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas⁹⁶, a efecto de defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda menoscabar sus derechos⁹⁷.

Aunado a lo anterior, en los artículos 8(2)(c), (d) y (e) se garantiza la asistencia letrada privada o estatal en los procesos judiciales y administrativos, y la falta de este constituye una violación a

⁹⁰ Corte IDH. Caso Fermín Ramírez, párrafo 121. y Caso Castillo Páez, párrafos 85-86.

⁹¹ Corte IDH. OC 21/14, Párr. 264.

⁹² Corte IDH. OC-17/02, párr. 77.

⁹³ Corte IDH. OC- 18/03, párr. 134.

⁹⁴ Corte IDH. OC-17/02, párr. 117.

⁹⁵ Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs Perú, párr. 103 y Caso del Tribunal Constitucional vs Perú. Párr. 70.

⁹⁶ Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs Panamá, párr. 127.

⁹⁷ Corte IDH. Caso Yatama vs Nicaragua, párr. 147.

las garantías judiciales⁹⁸. A criterio de la Corte, “se vulnera el derecho a las garantías y a la protección judicial por varios motivos: por el riesgo de la persona cuando acude a las instancias administrativas o judiciales de ser deportada, expulsada o privada de su libertad, y por la negativa de la prestación de un servicio público gratuito de defensa legal a su favor, lo cual impide que se hagan valer los derechos en juicio⁹⁹”.

En la especie, Arcadia les entregó a los 808 waienses, un listado de las instituciones jurídicas que les podían prestar el servicio de representación legal gratuita, pero estas no alcanzaron a prestarles dicho servicio a todos, por lo que hubo personas que no contaron con la posibilidad de ser defendidas en el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Esto generó que estas personas se encontraran en indefensión, en una situación de desigualdad para defenderse y discrepar de cualquier irregularidad, no pudiendo disfrutar de un verdadero acceso a la justicia y de un debido proceso legal en condiciones de igualdad.¹⁰⁰

Por otro lado, Arcadia estaba obligado a notificar al consulado de PW respecto de la detención de las 808 personas, y al no hacerlo limitó las posibilidades de defensa con las que hubiesen podido contar en este proceso. Y si bien, el contenido de este derecho se refiere más bien a la obligación de notificar al individuo detenido de su derecho a la asistencia consular [...] la Corte ha considerado que la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha

⁹⁸ Corte IDH. Caso Tibi vs Ecuador, párrafo 194.

⁹⁹ Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional vs Perú, párr. 81; Caso Durand y Ugarte vs Perú, párr. 129.

¹⁰⁰ Corte IDH. OC-17/02, párr. 97; OC-16/99, párrafo 120. Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago. Párr. 146; OC-18/03, párr. 121.

asistencia”¹⁰¹. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia ha señalado que el artículo 36(1)(b) de la Convención de Viena crea obligaciones del Estado receptor hacia el Estado que envía, así como también hacia la persona detenida¹⁰².

En ese sentido, Arcadia faltó a su obligación de garantizar el derecho de PW de asistir a sus nacionales a través de sus funcionarios consulares, y al constatar la inobservancia de estos deberes internacionales debe señalarse que estas situaciones viciaron de nulidad todo el procedimiento llevado a cabo contra estas personas, toda vez que el acceso a la comunicación y asistencia consular se convierte en un derecho que cobra una especial relevancia y debe ser garantizado y tratado de manera prioritaria por todos los Estados, en especial por las implicancias que puede tener en el proceso de recabar información y documentación en el país de origen¹⁰³ en casos como el presente.

Por consiguiente, se solicita a esta Corte declare que Arcadia es responsable internacionalmente por la vulneración de las garantías mínimas establecidas en los artículos 8(2)(c), (d) y (e) de la CADH.

▪ **Las garantías mínimas en el derecho a recurrir de un fallo.**

Los procesos de deportación de extranjeros deben ofrecer recursos efectivos que permitan a la persona que va a ser deportada solicitar que se protejan sus derechos¹⁰⁴. Esto implica que cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a revisión ante la

¹⁰¹ Corte IDH. OC-16/99, párr. 80.

¹⁰² Corte Internacional de Justicia, La Grand, 2001 ICJ Reports 466, párrafos 77 y 128.

¹⁰³ Corte IDH. OC-21/14, párr. 128.

¹⁰⁴ CIDH, Tercer Informe de Progreso de la Relatoría Sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, párrafo 77.

autoridad competente, y hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión.¹⁰⁵

Así, de conformidad con las garantías establecidas en los artículos 8 y 25, 22.7, y 22.8 CADH y tomando en cuenta las directivas y criterios del ACNUR¹⁰⁶, si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, se le debe brindar la información sobre como recurrir y concedérsele un plazo razonable para ello, según el sistema vigente, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada¹⁰⁷; y el recurso de revisión o apelación debe tener efectos suspensivos y permitir al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente adopte la decisión del caso, inclusive mientras esté pendiente el medio de impugnación, a menos que se demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada¹⁰⁸, así como garantizar al solicitante las facilidades necesarias¹⁰⁹, incluyendo el acceso a asesoría y representación legal.¹¹⁰

De este modo, Arcadia no solo estaba obligada a garantizarles a estas 808 personas recursos en contra de la decisión de expulsarlos, sino que también estos fueran efectivos y, esto implicaba que se les dieran las facilidades mínimas para hacerlo, como es precisamente el poder contar con asistencia jurídica gratuita, sobre todo por ser de escasos recursos económicos; sin embargo, como

¹⁰⁵ Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares artículo 22

¹⁰⁶ Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Párrs. 126 y 127, y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, párr. 175.

¹⁰⁷ Caso Vélez Loor Vs. Panamá, párr. 179, y Caso Mohamed Vs. Argentina, párr. 98. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mejorando los procedimientos de asilo: Análisis comparativo y recomendaciones para el Derecho y Práctica - Principales conclusiones y recomendaciones, pág.89

¹⁰⁸ Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Determinación del estatuto de refugiado, párr. e.vii.

¹⁰⁹ Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Párr. 154; y Caso López Mendoza Vs. Venezuela, párr. 117. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, procedimientos de asilo justos y eficientes: Una visión no exhaustiva de las normas internacionales aplicables, 2 de septiembre de 2005, p. 3.

¹¹⁰ Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, párr. 62, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Párr. 155. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, procedimientos de asilo justos y eficientes: Una visión no exhaustiva de las normas internacionales aplicables, p. 3.

se puede advertir, no todas las personas tuvieron acceso a esta garantía, lo que explica por qué 591 personas de las 808 no interpusieron recursos.

Así, el derecho de recurrir de estas personas fue vulnerado porque no se les otorgó una oportunidad real para defender su derecho a no ser deportados y comprobar que su presencia en Arcadia no constituía una amenaza a la seguridad pública, que ellos fueron víctimas del reclutamiento forzoso de las pandillas de su país, que habían sido coaccionados a cometer delitos, y sobre todo ya habían cumplido su condena y a partir de ese momento habían decidido huir de las pandillas y resocializarse, agregando que muchos de ellos tenían motivos familiares para permanecer en Arcadia, y que la deportación implicaría su separación permanente.

Pero, en todo caso dicho recurso resultaba ineficaz, pues no fue capaz de producir el resultado para el que había sido concebido¹¹¹, es decir, no constituyó un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.¹¹² En el *sub lite*, se puede apreciar que de las 217 que recurrieron de la decisión, ninguna fue amparada a pesar de tener un fundado temor que había sido corroborado por el Estado en caso de ser devueltos.

Por otra parte, el artículos 8.1 y 25 de la CADH consagran también el acceso a la justicia, por lo que, si una determinada acción es el recurso destinado por la ley para obtener la restitución del derecho que se considera violado, toda persona que sea titular de dicho derecho debe tener la posibilidad real de interponerlo.¹¹³

¹¹¹ Corte IDH. Caso Ximenes Lopes vs Brasil, párr. 192, Caso Yvon Neptune vs Haití, párr. 77.

¹¹² Corte IDH. OC-9/87, párr. 24.

¹¹³ Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Párr. 106

Por ello, los abogados de la Clínica Jurídica presentaron una demanda al consulado de Arcadia por actividad administrativa irregular y reparación integral del daño en perjuicio del señor Gonzalo Belano, de otras 36 víctimas identificadas (29 víctimas de asesinato y 7 desaparecidos), así como de las otras 771 personas, pero dicha autoridad estableció que “la presentación de la demanda en materia administrativa debe hacerse directamente ante el juzgado competente.”

Al respecto, los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o a los tribunales en busca de que sus derechos sean protegidos o determinados. Consecuentemente, cualquier norma o medida estatal, en el orden interno, que dificulte de cualquier manera, y que no esté justificado por necesidades razonables de la propia administración de justicia, debe entenderse como contraria a la Convención¹¹⁴.

Por tanto, aun y cuando el Estado alegue que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad resulta compatible con la CADH,¹¹⁵ Arcadia tenía la obligación de precisar cual era la autoridad competente, o en su defecto remitirlo ante la autoridad que sí era la competente¹¹⁶ para conocer sobre dicha demanda.

Como consecuencia, Arcadia debe ser declarada responsable internacionalmente por la vulneración de la garantías judiciales que deben ser satisfechas al momento de recurrir y por negar el acceso a la justicia artículos 8 y 25 CADH.

¹¹⁴ Manuel E. Ventura Robles. Ponencia sobre: La jurisprudencia de la corte interamericana derechos humanos en materia de acceso a la justicia e impunidad. Pág. 3

¹¹⁵ Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú, párr. 126.

¹¹⁶ Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. México. Párr. 119-131.

VII. PETITORIO.

Se solicita a esta Corte que desestime las excepciones preliminares interpuestas y declare responsable internacionalmente a Arcadia por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, 7, 8, 17, 19, 24, 25, 22.7, y 22.8, de la CADH, en relación con el artículo 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de Gonzalo Belano y otras 807 personas wairenses.

VIII. MEDIDAS DE REPARACIÓN.

Con base en el artículo 63.1 de la CADH, que obliga a los Estados que han causado daño a repararlo, se solicita que: a) Se ordene el pago de una indemnización, b) Se adopten las medidas para lograr la reunificación familiar en Arcadia, c) Se capacite a las autoridades sobre las cláusulas de exclusión de la condición de refugiado y el principio de no devolución, d) Se garantice la posibilidad de obtener la condición de refugiado a los expulsados que se encuentren en una situación de peligro a su vida e integridad personal, y e) Se garantice el derecho a contar con un abogado de forma gratuita en los procedimientos migratorios.